

POSTURA OFICIAL
DEL CONSEJO NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

del 30 de julio de 2021

**en el asunto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 15 de julio
de 2021 (C-791/19)**

El Consejo Nacional del Poder Judicial polaco comunica su preocupación y decepción causadas por el contenido de la sentencia del TJUE del 15 de julio de 2021 que reza que el nuevo sistema de responsabilidad disciplinaria no garantiza la independencia y la imparcialidad de la Izba Dyscyplinarna (Sala Disciplinaria) porque, entre otros motivos, sus jueces fueron nombrados por el Consejo Nacional del Poder Judicial compuesto de 15 jueces miembros nombrados por la cámara baja del parlamento polaco (Sejm), y porque el Consejo Nacional del Poder Judicial es un órgano cuya independencia puede suscitar dudas legítimas.

En primer lugar, sentimos destacar que el Tribunal decidió prescindir de los fundamentos de hecho, los que son típicamente la base de toda decisión jurisdiccional, y en su lugar reconoció las preocupaciones y las sensaciones que suelen formar parte del mundo de la política y comentarios mediáticos. En su forma actual, el Consejo Nacional del Poder Judicial ha estado funcionando durante más de tres años (39 meses), por lo que cualquier duda acerca de su independencia ya debería haber encontrado una prueba material durante este período. El Consejo opina que hasta la fecha no se ha dado caso alguno que fundamente la acusación de dependencia, tanto de entidades políticas como de grupos de presión dentro de la profesión; además, es preciso tener en cuenta que tanto el Consejo como sus miembros han sido víctimas de numerosos ejemplos de presión, ataques, y hasta ostracismo profesional. Si el Consejo actuara de manera dudosa respecto a su independencia –sobre todo en lo que concerniese los nombramientos de jueces del Tribunal Supremo (Sąd Najwyższy) y su Sala Disciplinaria–, tal actuación seguramente no pasaría desapercibida por el Tribunal, la Comisión Europea, o unos círculos particulares de jueces en la República de Polonia. El Tribunal no destacó ninguna acción del Consejo o de sus miembros para poner en relieve sus preocupaciones, por lo que el Consejo entiende que, de esta forma, su imparcialidad y fiabilidad quedan reconocidas en lo relativo al ejercicio de las funciones constitucionales.

La sentencia del 15 de julio de 2021 da la sensación de que el Tribunal opina que un consejo judicial que no haya sido nombrado por el parlamento, sino por los mismos jueces, es el único que puede garantizar la imparcialidad de los nombrados. Así, el tribunal no solo contradijo su postura, adoptada en la sentencia de 9 de julio de 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, apartados 55, 56, lo que él mismo reconoció expresamente en el apartado 103 de la sentencia del 15 de julio de 2021, sino también cuestionó indirectamente la imparcialidad de los jueces en todos aquellos Estados miembros de la Unión Europea donde la selección de miembros de consejos judiciales es, de hecho, una de las prerrogativas del parlamento (España), o donde tales consejos simplemente no existen (Alemania, Austria, Chequia, estados escandinavos). Mientras tanto, nunca se ha cuestionado la imparcialidad de los jueces en esos Estados, por lo que una conclusión parecida tiene que rechazarse *a limine*.

Unas conclusiones similares deberían sacarse también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso Clarke contra Reino Unido, el TEDH dictaminó que tan solo nombrar y destituir los jueces por el poder ejecutivo no supone una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos, siempre y cuando los nombrados permanezcan independientes de toda influencia o presión a la hora de ejercer sus respectivos cargos. En el caso Majorana contra Italia, el TEDH tomó una decisión parecida, al constatar que no perjudica la imparcialidad de los jueces de tribunales administrativos su nombramiento efectuado por las autoridades administrativas locales, siempre y cuando ejerzan sus funciones de manera independiente.

Cabe destacar que la selección de los jueces del Tribunal Supremo, inclusive los jueces de la Sala Disciplinaria, realizada por el Consejo tras el cambio del procedimiento de su composición, se efectuó por la primera vez de manera abierta y transparente. Las sesiones del Consejo fueron transmitidas en vivo y en línea mientras los candidatos al Tribunal Supremo presentaban sus candidaturas ante el Consejo, hecho sin precedentes hasta la fecha. Hasta entonces, estos procedimientos no habían sido transparentes y los candidatos nunca habían tenido una oportunidad parecida. Antes del 2018, los candidatos para el Tribunal Supremo los seleccionaba la junta general de los jueces del Tribunal Supremo, Conforme a su propio reglamento sin rango de ley. De esta manera, el Consejo Nacional del Poder Judicial nombraba los jueces del Tribunal Supremo, pudiendo escoger únicamente entre los candidatos recomendados por los jueces del mismo tribunal, mediante un procedimiento secreto y opaco. En lo práctico, el número de candidaturas para el Tribunal Supremo tramitadas por el Consejo

no excedía el número de puestos vacantes. El nombramiento dependía entonces, en mayor medida, de la voluntad de los mismos jueces del Tribunal Supremo: situación irregular desde el punto de vista constitucional. Por lo tanto, el procedimiento tenía el carácter de cooptación y no de oposición. Solo a partir del 2018 la elección de candidatos para el Tribunal Supremo se hizo transparente y sujeto al control de los representantes de la sociedad civil.

Visto lo que antecede, cabe reiterar que el Consejo Nacional de Poder Judicial nunca, y seguramente no en el procedimiento de selección de los jueces de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, ha dado razón alguna para cuestionar su independencia y jamás ha violado sus deberes constitucionales.

En modo de resumen, el Consejo Nacional del Poder Judicial les ruega a todos los participantes del debate público, y a los jueces de tribunales civiles, administrativos y del Tribunal Supremo en particular, que formulen sus opiniones con moderación y tacto, siempre priorizando el orden legal de la República de Polonia. El Consejo Nacional del Poder Judicial reitera su opinión que la resolución de la presente crisis será posible únicamente mediante el respeto, tanto a la ley internacional vinculante para Polonia, como –de igual grado– a la constitución polaca que, para todos los actores del debate público, es el punto de referencia en sus respectivas acciones. El Consejo está convencido de que la clave para una solución legal adecuada es la preocupación por el bien común, superior a toda simpatía o antipatía personal, política o ideológica.

Fdo. Presidente del Consejo Nacional del Poder Judicial

Juez Paweł Styrna